

Título: Educación en contextos de encierro: una herramienta de inclusión

Autor: López, Yemina

Centro de Investigación en Lectura y Escritura (CILE), Facultad de Periodismo y Comunicación Social (FPCS) – Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Calle 44 N° 676. Código postal 1900 – La Plata

[yemina.lopez@gmail.com](mailto:yemina.lopez@gmail.com)

Palabras clave: educación – universidad – contextos de encierro

En el marco de las Jornadas Internacionales de Sociedad, Estado y Universidad, "La Universidad del siglo XXI: La educación como un derecho y las dimensiones de la inclusión social", este trabajo busca problematizar la presencia del Estado dentro de las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en la Argentina actual e indagar sobre cómo a partir de estas experiencias se generan nuevos aprendizajes, tanto para quienes concurren al penal como docentes como quienes viven el proceso desde adentro como estudiantes. En este sentido, me propongo precisamente analizar la incorporación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) dentro del penal N°9, ubicado en calle 76 entre 9 y 11 de la ciudad capital de la provincia, y cómo la posibilidad de cursar una carrera de grado transforma las trayectorias individuales y colectivas de los privados de la libertad.

Asimismo, en el marco de mi beca doctoral<sup>1</sup>, me propongo problematizar cómo estas políticas educativas (con sus lógicas transformadoras y de emancipación) coexisten con las políticas de control y seguridad que se imponen constantemente en las cárceles bonaerenses. Y cómo, a su vez, esta garantía del derecho a la educación se convierte, paralelamente, en un sistema de premios y castigos por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense y en un desafío constante para quienes buscan en la educación una herramienta de inclusión social.

---

<sup>1</sup> Titulada "Leer y escribir en contextos de encierro. Los desafíos de acceder a la Universidad desde el penal en la ciudad de La Plata". Dirigida por el Lic. Marcelo Belinche y la Dra. Rossana Viñas, con lugar de trabajo en el Centro de Investigación en Lectura y Escritura (CILE) de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social – UNLP.

Esta investigación de tipo doctoral se encuentra en sus inicios, ya que actualmente estoy cursando el segundo año del Doctorado en Comunicación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social – Universidad Nacional de La Plata. En este sentido, este trabajo recupera algunas reflexiones y debates que me encuentro teniendo en torno a esta experiencia de educación en cárceles y cómo a partir de ésta el Estado se hace presente en su faceta educativa para las personas privadas de su libertad.

“Leer y escribir en contextos de encierro. Los desafíos de acceder a la Universidad desde el penal en la ciudad de La Plata” es una investigación que surge de una inquietud personal en torno a cómo el acceso a la educación transforma las trayectorias personales y colectivas de las personas privadas de su libertad. Asimismo, se propone problematizar la presencia del Estado en el ámbito educativo dentro de las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en la Argentina actual e indagar sobre cómo a partir de estas experiencias se generan nuevos aprendizajes, tanto para quienes concurren al penal como docentes como quienes viven el proceso desde adentro como estudiantes. Por esta razón es que me he centrado en el vínculo entre la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) -principalmente a través del Programa Educación Superior en Cárceles de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social- y la Unidad Penitenciaria N°9 de la ciudad de La Plata.

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social (FPyCS) permite a los estudiantes privados de su libertad inscribirse en las diferentes carreras que allí se dictan a través de tres modalidades: examen libre, cursada en la sede del bosque (permiso del juez mediante) y cursadas dentro de la unidad penitenciaria N° 9 de la ciudad de La Plata. Estas diferentes modalidades de cursada fueron muy discutidas hacia el interior de la unidad académica, ya que el objetivo principal del Programa Educación Superior en Cárceles es que los estudiantes concurren a la Facultad a cursar sus estudios universitarios; que entren en contacto con actores externos al penal y transiten la experiencia de estudiar por fuera de las lógicas penitenciarias. Sin embargo, como bien lo expone el Secretario de Derechos Humanos de la FPyCS, Jorge Jaunarena, “dijimos: si ponemos la carrera adentro no van a traer a nadie a cursar a nuestra sede, entonces pusimos un límite, un tope que era por áulica y dábamos dos clases, entonces teníamos 60 estudiantes. 60, en una población potencial de

dos mil, dos mil y pico de presos y presas en condiciones de estudiar en la Universidad entonces dijimos: estamos bien. Nos aseguramos esos sesenta, que vayan juntando materias, que hagan el ciclo básico adentro, y después tenemos sesenta tipos acá adentro haciendo el ciclo superior”<sup>2</sup>.

Los estudiantes de diferentes unidades penitenciarias tienen la posibilidad de inscribirse en la Facultad, rendir las materias libres que el Plan de Estudios 98 les permite y cursar las materias obligatorias del ciclo básico de la carrera en la extensión áulica N° 9. Luego, para cursar en la sede Néstor Kirchner ubicada en diagonal 113 y 63 de la ciudad de La Plata, la inscripción se tramita vía la coordinación educativa del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) para luego ser remitidas a la FPyCS. El SPB es el encargado de los trámites vía juzgado para la autorización de las cursadas.

El acceso a la educación se constituye en una herramienta clave para el desarrollo integral de sujeto humano. Por eso mismo es que este tipo de experiencias cobran relevancia, ya que a pesar que la mayoría de los estudiantes se acercan a los estudios universitarios en pos de una obtención de beneficio, la posibilidad de realizar una carrera de grado transforma, de manera considerable, sus trayectorias dentro de la cárcel.

### **Las cárceles hoy**

Según el informe 2016 realizado por el Registro Único de Personas Detenidas<sup>3</sup> (de ahora en más, RUD), “al día 17 de diciembre de 2016, surge un total de 42.419 personas privadas de la libertad en los términos de la Ley N° 11.922” (RUD, 2016: 4). Este dato incluye todas las personas detenidas a disposición del Poder Judicial que se encuentran alojadas tanto en la esfera del Servicio Penitenciario Bonaerense, como Alcaldías y dependencias policiales de la Provincia; también se incluyen en este informe arrestos o prisiones domiciliarias y

---

<sup>2</sup> Fragmento de entrevista realizada al Secretario de Derechos Humanos de la FPCS – UNLP, Jorge Jaunarena.

<sup>3</sup> El sistema Informático del Registro de Personas Detenidas (RUD) se implementa desde el 7 de noviembre de 2006. Éste se nutre de la información que vuelcan los organismos jurisdiccionales y dependencias del Ministerio Público, de forma tal que centraliza la información de todas las personas aprehendidas y/o detenidas en la Provincia de Buenos Aires.

aquellas personas que se encuentran alojadas en el Servicio Penitenciario Federal o los Servicios Penitenciarios y dependencias policiales de otras Provincias (RUD, 2016). En la ciudad de La Plata se encuentran detenidas 3.781 personas, lo que constituye el 9% de la población total encarcelada de la provincia de Buenos Aires.

Este informe, que es uno de los únicos datos oficiales que se tienen actualmente, expresa también que el 95% de la población carcelaria de la provincia está compuesta por hombres, mientras que sólo el 5% son mujeres. Otro dato no menor a tener en cuenta es que el 53% es menor de 30 años, el 28% tiene entre 30 y 40 y sólo el 19% supera los 50 años de edad. Si hacemos foco puntualmente en la ciudad de La Plata, los porcentajes se mantienen: 51% menor a 30 años, 28% entre 30 y 40 y 21% mayor a 50.

En este sentido, los datos hasta aquí expresados dan cuenta de una población con características muy similares entre sí: hombres, en su mayoría jóvenes y de sectores sociales vulnerables; sin una educación completa ni trabajo fijo a la hora de su entrada en el sistema carcelario.

La caracterización de esta población es importante en tanto se asocia a un discurso social de estigmatización que se ha instalado fuertemente en la sociedad argentina en los últimos años, y que ha llevado a lo que Rodríguez Alzueta llama “encarcelamientos en masa” (2015). Es decir que “la cárcel contemporánea está diseñada para sacar de circulación al excedente poblacional, y para fijarlo en determinado lugar del espacio social” (Rodríguez Alzueta, 2015: 26), lo que ha conllevado, en las últimas décadas, un hacinamiento y sobrepoblación de las unidades penitenciarias, principalmente en la provincia de Buenos Aires.

Hoy día, ya no se trata de corregir cuanto de depositar. Las cárceles ya no están para incluir sino para practicar la exclusión o, mejor dicho, para garantizar el devenir disfuncional de los excluidos. Función que se averigua enseguida en los clichés que utiliza la opinión pública para nombrar a la cárcel: ya no se dice que vayan a la cárcel “para que aprendan”, sino “para que se pudran” (Rodríguez Alzueta, 2015: 22).

El Comité contra la tortura, perteneciente a la Comisión por la Memoria, en su informe anual del año 2016 puso de manifiesto la falta de accionar estatal con respecto a la

problemática de la sobrepoblación en las cárceles bonaerenses, y la recurrencia en la declaración de emergencia:

El 15 de enero de 2016 la Legislatura bonaerense aprobó la Ley 14.806 declarando la “emergencia en materia de seguridad pública y de política y salud penitenciaria” por el término de 12 meses. Las declaraciones de emergencia penitenciaria fueron recurrentes en la provincia: por medio de decretos o leyes, se las dictó en 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2014. Una situación de emergencia permanente muestra la persistencia de problemas estructurales y no una situación coyuntural que se resuelve con un funcionamiento de excepción, como corresponde a la caracterización de “emergencia” en el ordenamiento constitucional (Comité Provincial por la Memoria, 2016: 31).

Los informes realizados año a año por el Comité contra la Tortura, perteneciente a la Comisión Provincial por la Memoria dan cuenta de la presencia estatal en su rol represivo y excluyente dentro de las cárceles bonaerenses, pero ausente en materia de cuidados y garantía de derechos humanos. Es justamente por esta realidad que se vive que resulta fundamental comenzar a pensar cómo la presencia de la universidad dentro de las unidades penitenciarias se constituye en presencia y accionar estatal, principalmente en este contexto de tanta vulnerabilidad de derechos y abandono de las personas.

### **Sujetos de derechos**

Es importante pensar a estos estudiantes como sujetos de derechos, en tanto el estar en contextos de encierro punitivo no les quita ciertas garantías que el Estado y la Ley establecen. Sin embargo, y como es sabido, el encierro conlleva la vulnerabilidad de muchos derechos básicos, algunos incluso que se encontraban restringidos antes de su entrada en el penal (como es el acceso a la educación y al trabajo). Por eso mismo es que en este punto me interesa hacer foco en la categoría de privado de la libertad, en tanto conceptualiza al encierro como un estado de la persona y no una característica que le es propia:

Tomando esta denominación como una categoría jurídica que hace mención al estado del y no al sujeto en sí mismo; entendiendo que estar privado/a de la libertad y ser privado/a de la

libertad son cosas distintas. Asimismo, se concibe la conceptualización de “privado/a” como una noción que engloba todo lo que les ha sido denegado antes y durante su estadía en el penal; hace mención y referencia a todo aquello a lo que estas personas se encuentran ajenas a partir del encierro y el aislamiento que la prisión conlleva (López, 2016: 18).

Por eso mismo es que considero que esta categoría no sólo es conceptual, sino también –y principalmente- política; la decisión de nombrar a estos sujetos como privados de la libertad y no como presos, internos, reclusos, convictos y/o penados está fundada en una postura sobre el objeto de estudio que intenta despegarse del lenguaje carcelario para reafirmar su lugar de sujetos de derechos.

Debemos considerar que las cárceles bonaerenses se encuentran sobrepobladas, como se mencionó anteriormente, de hombres jóvenes, pobres, con situación educativa y laboral precaria a la hora de su entrada al penal. Por eso mismo es que es importante revisar la integralidad de los Derechos Humanos y el rol del Estado en la garantía de los mismos, principalmente hacia el interior de las unidades penitenciarias.

Tal y como lo expone Francisco Scarfó, la educación es un derecho humano esencial para ejercer la integralidad de los derechos,

(...) y que tiene como fin el desarrollo integral del sujeto. Que una persona acceda a la educación implica entonces que pueda crear un lazo de pertenencia a la sociedad y, en pocas palabras, a la transmisión y recreación de la cultura. Es el Estado quien debe garantizar y promover el goce efectivo de éste y de todos los derechos humanos, ya que en teoría la persona encarcelada sólo está privada de su libertad ambulatoria (Scarfó, 2013: 92).

Asimismo, el acceso a la educación transforma las trayectorias personales y colectivas de los sujetos que acceden a ella, pero también tiene incidencia en aquellos que no quieren (o no pueden) estudiar una carrera universitaria. Tal y como lo expone Atrapamuros<sup>4</sup> en su página de facebook:

---

<sup>4</sup> Atrapamuros es un colectivo de trabajo en cárceles, que forma parte del Movimiento Popular Patria Grande y que todos los años publica una revista llamada *Atrapamuros* -una revista desde y sobre la cárcel-. También tienen un blog y una página de Facebook donde brindan una mirada sobre las cárceles argentinas.

A pesar de que sólo el 1% de la población carcelaria bonaerense estudia alguna carrera universitaria, los centros de estudiantes universitarios muchas veces tienen un papel clave para motorizar cambios en las unidades penales. La posibilidad de acceder a la educación no es ahistórica, sino que se ganó con mucha lucha en los pabellones (2017).

En muchos casos, el acceso al penal es la primera posibilidad que estas personas tienen de acceder a la educación. Y es que “hay personas que se encuentran por primera vez con una escuela dentro de la cárcel, y otras que aprender a leer y escribir dentro de ella” (Atrapamuros, 2017). Por eso es que acceder a la educación, además de ser un derecho a ejercer, es en muchos de los casos la primera posibilidad de elegir qué hacer con su futuro.

### **El Programa Educación Superior en Cárceles**

El programa Educación Superior en Cárceles de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social – UNLP está orientado a la garantía del derecho a la educación en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, particularmente de la ciudad de La Plata. Si bien la extensión áulica se encuentra en la unidad penitenciaria N° 9, allí concurren estudiantes alojados en diversas unidades cercanas, como lo son Unidad N° 1 de Olmos, Unidad N°8 y N°33 de Los Hornos, Unidad N°12 y N°18 de Gorina, y Unidad N°26 y N°45 de Melchor Romero. Asimismo, se encuentran inscriptos en la carrera personas de las Unidades N°6 de Dolores y N°24, N°31, N°32 y N°42 de Florencio Varela, quienes participan a través de la modalidad examen final, para luego tramitar un traslado a unidades cercanas a la FPyCS o la Unidad N° 9.

Este programa resulta un caso de estudio interesante para analizar cómo el Estado puede hacerse presente a través de la educación dentro de las cárceles bonaerenses y cómo a partir de la presencia de la universidad se generan corrimientos y transformaciones en las trayectorias personales y colectivas de las personas privadas de su libertad. Entre sus objetivos principales, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, busca con este programa:

Fomentar el ejercicio del derecho a la educación dentro de las Unidades Penitenciarias pertenecientes al Servicio Penitenciario Bonaerense.

Desarrollar estrategias educativas que permitan a las personas privadas de libertad, alojadas en el Servicio Penitenciario Bonaerense, iniciar o completar estudios universitarios en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata.

Fortalecer la autonomía universitaria promoviendo actividades de producción, extensión e investigación que aporten al conocimiento y a la intervención en la realidad carcelaria.

Fomentar en los/as estudiantes privados de libertad la capacidad de transferir su experiencia de sujetos del aprendizaje dentro y fuera del sistema carcelario.

Contribuir a la construcción de instrumentos que posibiliten una inserción superadora dentro de la comunidad.

Estimular la oferta educativa destinada a personas privadas de su libertad, dentro de la Universidad Nacional de La Plata (AA.VV., 2013)

Resulta interesante traer los objetivos del programa en este punto, en tanto reafirman la importancia que se le da a la inserción dentro de la comunidad de estas personas privadas de su libertad, a la transmisión de la experiencia a otros y, principalmente, a la garantía del derecho a la educación.

En julio del año 2011, a partir de una encuesta realizada por el SPB que dio cuenta de la desigualdad en el acceso a la educación por parte de aquellos sujetos que habitan las cárceles bonaerenses, se sancionó la ley 26.695, modificatoria de la ley 24.660 “Ejecución de la pena privativa de la libertad”. Esta nueva ley reafirmó el trabajo que se venía haciendo desde la FPyCS y dio un marco legal a este Programa. La ley establece, entre otras cosas, en su artículo 133 que:

(...) todas las personas privadas de su libertad tienen derecho a la educación pública. El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad indelegable de proveer prioritariamente a una educación integral, permanente y de calidad para todas las personas privadas de su libertad en sus jurisdicciones, garantizando la igualdad y gratuidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones no gubernamentales y de las familias.

Asimismo, se agrega, en su artículo 135 que:

El acceso a la educación en todos sus niveles y modalidades no admitirá limitación alguna fundada en motivos discriminatorios, ni en la situación procesal de los internos, el tipo de



establecimiento de detención, la modalidad de encierro, el nivel de seguridad, el grado de avance en la progresividad del régimen penitenciario, las calificaciones de conducta o concepto, ni en ninguna otra circunstancia que implique una restricción injustificada del derecho a la educación.

A pesar de lo que la ley establece, es sabido que no se cumple en su totalidad y principalmente este artículo, en tanto el acceso a la educación (en todos sus niveles, pero principalmente en el superior) se ha convertido en un sistema de premios y castigos, donde no llegan a estudiar quienes lo quieren, sino aquellos que tienen el permiso del Servicio Penitenciario para hacerlo.

Sin embargo, y a pesar de las trabas que el Servicio Penitenciario pone constantemente para el desarrollo de las actividades dentro y fuera del penal (falta de transporte y/o personal para llevar a los estudiantes a cursar, demora en el acceso al penal de los profesores que concurren a dar clases, traslados arbitrarios de los estudiantes), la experiencia de la Universidad dentro del penal genera corrimientos y transformaciones muy interesantes que deben comenzar a analizarse y problematizarse. Tal y como lo expone Atrapamuros en su página de Facebook, “los espacios educativos en las cárceles funcionan como espacios de recreación, de encuentro, de interacción entre personas que habitan la cárcel pero que, al estar alojados en módulos o pabellones distintos, no se encuentran en el cotidiano” (2017). Es decir que estos espacios se constituyen como ámbitos de encuentro, de relación y de ruptura de las lógicas carcelarias; logran en otras palabras, “romper con la organización de la población carcelaria que impone el Servicio Penitenciario: el agrupamiento de sectores según diversas características en una lógica de premios y castigos que individualiza y divide a la población entre sí” (Atrapamuros, 2017).

El acceso a la educación se convierte entonces en una posibilidad de crecimiento y transformación, no sólo dentro del aula, en la interacción entre estudiantes y docentes, con lógicas propias de la educación, sino también en el vínculo que se gesta entre los propios estudiantes privados de la libertad, por encima de las trabas e impedimentos que impone el Servicio Penitenciario constantemente, en tanto estos “son espacios donde los pibes se organizan, donde se vehiculizan reclamos, donde se arman escritos, y es por ese motivo también son espacios que están constantemente en riesgo (Atrapamuros, 2017).

En palabras de uno de los entrevistados, la presencia de la universidad dentro del penal ayuda a la constitución del yo, a la subjetivación en un contexto donde se busca posicionar al sujeto como objeto. En este sentido, Mariano menciona que la educación “trabaja mucho el tema de la autoestima, de encontrarse; es un llamado a ser sujeto, que es el que deconstruye la cárcel. La cárcel te convierte en objeto, te destruye el yo, y está pensada para eso. Y esto que hablo de los procesos de automatización, donde te convertís en una ficha desde el primer momento que ingresás, te despojan de cosas que te identifican: esto podés tenerlo, esto no; todas las actividades de tu vida se desarrollan en el mismo lugar, no es que trabajás en un lado, estudiás en otro, cenás en otro y dormís en otro. No, todas las actividades... y eso destruye mucho el tema de la identidad, qué es lo que significa, y sobre todo te automatiza, por eso hablo de la desocialización que produce la cárcel”<sup>5</sup>.

### **La educación como práctica de transformación**

Como se ha desarrollado a lo largo de todo esta publicación, la educación (particularmente, el caso del Programa Educación Superior en Cárceles de la FPyCS – UNLP) se constituye en una práctica de transformación para las personas privadas de su libertad que acceden a ella. La educación tiene un objetivo emancipador y libertador por sí mismo, sin embargo, en el marco de los contextos de encierro punitivo, esta lógica se encuentra constantemente en tensión, ya que es complejo coordinar y articular la mirada educativa con la carcelaria:

En la actualidad, se la suele cruzar o someter a los fines de la pena o de la cárcel con el de la educación. Para ello se utilizan términos como “rehabilitar”, “resocializar”, “reinsertar”, “reeducar”, entre otros “re”. Es decir, con esta lógica, la educación es pensada como una tecnología del tratamiento penitenciario de carácter terapéutico. Esto conlleva a que en la práctica y en su ejercicio diario, se la plantee como un “beneficio” o una mercancía de cambio por buena o mala conducta (Scarfó & Zapata, 2013: 8).

La presencia de la universidad –y junto a ella la educación- dentro de los penales constituye una apuesta y un desafío constante, en tanto no sólo es una garantía de un derecho básico

---

<sup>5</sup> Fragmento de entrevista realizada a Mariano, estudiante con salidas transitorias para cursar sus estudios superiores en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social.

como la educación, sino también porque repercute en la organización y problematización de muchos de los derechos vulnerados dentro de los penales. Es justamente por esta razón que el Servicio Penitenciario se encuentra tan reacio a las prácticas educativas intramuros.

Me interesa rescatar, a modo de cierre, un aspecto no menor remarcado por la mayoría de los estudiantes en contextos de encierro punitivo entrevistados, como lo es la inclusión y contención que han experimentado por parte de la institución educativa en su recorrido por las carreras de Comunicación Social.

Indiana, una de las primeras estudiantes privadas de su libertad que pudo salir del penal para cursar menciona que “me incluyeron y me trataron como una estudiante más, a pesar de estar privada de mi libertad. Entonces eso me hacía sentir libre; me hace sentir libre. Me ayuda a pensar y reflexionar un montón de cosas, que antes no podía”<sup>6</sup>. En la misma línea lo expresa Manuel, un estudiante con libertad condicional que comenzó sus estudios estando dentro del penal: “tiene un montón de cosas que no es solamente llevar la carrera, sino el acompañamiento de parte de la facultad, de hacerlo sentir al otro parte y eso fue lo que jugó mucho. La mayoría de los pibes que empezamos nos sentimos parte y ya cuando salimos afuera éramos parte de la facultad. Si bien era raro, tengo compañeros que hicieron el primario y el secundario adentro de una cárcel, o sea que imaginate lo que es quizás una universidad”<sup>7</sup>.

La experiencia que desarrolla la Facultad de Periodismo y Comunicación tiene, además, ese adicional. No sólo busca garantizar el derecho a la educación a todas estas personas privadas de su libertad, sino que también lo hace con dos de sus pilares fundamentales para con todos los estudiantes: la inclusión y contención; el hacer sentir al otro que no es un número más dentro del aula. Y es que en un contexto de tanta exclusión y violencia, la presencia de la educación superior se erige como un modo de poder pensarse y re-pensarse de un modo diferente y construir un futuro mejor.

---

<sup>6</sup> Fragmento de entrevista realizada a Indiana, estudiante privada de su libertad que cursó sus estudios superiores en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y recientemente se recibió del Profesorado en Comunicación.

<sup>7</sup> Fragmento de entrevista realizada a Mariano, estudiante en libertad condicional que cursa sus estudios superiores en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social.

## Bibliografía

- AA.VV. (2016) *Informe anual 2016. Sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires*. La Plata: Comisión Provincial por la Memoria
- AA.VV. (2013). “Programa de educación superior en cárceles. FPyCS – UNLP”. Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Documento de circulación interna en el marco de la Secretaría de Derechos Humanos. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.
- Atrapamuros (2017, septiembre, 18) “Defender la educación pública”. Consultado el 20 de septiembre de 2017 en: <https://www.facebook.com/notes/atrapamuros-educaci%C3%B3n-popular-en-c%C3%A1rceles/defender-la-educaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-es-defender-la-educaci%C3%B3n-en-c%C3%A1rceles/1730947156950487/>
- López, Y. (2016). Trabajo Integrador Final: “Comunicación Social desde los contextos de encierro. Desafíos y representaciones de acceder a una carrera de grado desde el penal”. La Plata: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.
- Rodríguez Alzueta, E. (2015). “Circuitos carcelarios El encarcelamiento masivo-selectivo, preventivo y rotativo en Argentina”. En AA.VV. (2015) *Circuitos Carcelarios. Estudios sobre la cárcel argentina*. Ediciones EPC: La Plata.
- Scarfó, F. J., & Aued, V. (2013). “El derecho a la educación en las cárceles: abordaje situacional. Aportes para la reflexión sobre la educación como derecho humano en contextos de la cárcel”. En *Revista Eletrônica de Educação*, 7(1), pp. 88-98.
- Scarfó, F. J. & Zapata, N. (2013) “Obstáculos en la realización del derecho a la educación en cárceles. Una aproximación sobre la realidad Argentina”. En Cátedra UNESCO de investigación aplicada para la educación en la cárcel, Montreal (Canadá). Consultado el 05 de noviembre de 2017 en: <http://www.cmv-educare.com/es/?s=Zapata>